

JAVIER BUENO ANTE EL JUZGADO MILITAR DE PRENSA

Juan A. Ríos Carratalá

ja.rios@ua.es

La trayectoria del periodista madrileño Javier Bueno (1891-1939) cuenta con una bibliografía que se corresponde con su especial significación entre quienes protagonizaron el periodismo más comprometido y combativo del período republicano. En el futuro libro sobre el Juzgado Militar de Prensa recurriré a esas fuentes para ampliar y contextualizar la información relacionada con su procesamiento en el verano de 1939, pero en esta nota científica publicada en el repositorio de la Universidad de Alicante me limitaré a extractar el sumario 33.582 depositado en el Archivo General e Histórico de Defensa. El objetivo es contrastar los datos del mismo con la comunidad científica a la espera de la versión definitiva de este capítulo del citado libro.

Al finalizar la Guerra Civil, Javier Bueno, que hasta entonces había sido el director del diario socialista *Claridad* y un activo representante de los periodistas que permanecieron en la capital, dejó atrás a su numerosa familia -ocho hijos- para pedir asilo en la embajada de Panamá. Antifascista y con un amplio historial de represalias, su única esperanza a los cuarenta y ocho años era la supervivencia en el exilio, después de haber apostado por el coronel Casado durante los últimos compases del conflicto en Madrid.

Los vencedores que tanto se habían beneficiado de la extraterritorialidad en Madrid cambiaron de criterio cuando finalizó la contienda. Antes de que las relaciones diplomáticas con el gobierno de Burgos se restablecieran con una cierta normalidad, el primer objetivo era sacar de las legaciones no reconocidas a los refugiados en búsqueda de asilo político. El 4 de abril, solo tres días después de firmar el general Franco el último parte de guerra, el periodista madrileño fue «extraído» de la legación diplomática junto con otros diez refugiados, detenido y enviado a la segunda galería de la cárcel de Porlier, donde ingresó con la cara amoratada por los golpes recibidos. Javier Bueno ya tenía una acreditada y polémica experiencia en materia de torturas o maltratos, al igual que en detenciones por motivos políticos o periodísticos. La participación en la

Asturias de 1934 resultó intensa. La pieza de los republicanos era codiciada por sus antecedentes revolucionarios y su suerte estaba echada. El posterior proceso se llevó a cabo con una significativa celeridad, que repercutió negativamente en las ya escasas garantías jurídicas de los consejos de guerra sumarísimos.

El 15 de julio de 1939, el auditor de guerra del Ejército de Ocupación se dirige al juez Manuel Martínez Gargallo para que instruya en el Juzgado Militar de Prensa el sumario n.º 33.582 contra Javier Bueno y Bueno, que permanecía en la citada y abarrotada cárcel del barrio de Salamanca. El 17 de julio, el juez y su secretario dan por recibida la orden del auditor y proceden inmediatamente contra el detenido. Ese mismo día el secretario designado para la causa, al igual que en otros casos analizados en *Nos vemos en Chicote* (2015), da fe y testimonio de que en el juzgado «existe una ficha en la que se recoge la totalidad de los antecedentes que le han sido suministrados por personas y entidades de absoluta solvencia en relación con las actividades políticas y profesionales del culpado Javier Bueno y Bueno». La cita no es textual porque omito, como en otras ocasiones, los errores gramaticales y las faltas de ortografía de los oficiales del Cuerpo Jurídico.

La lectura atenta de los documentos depara sorpresas. En este sumarísimo de urgencia, lo peculiar no es que esa ficha sea de procedencia anónima y que la misma solo pudiera ser consultada por el secretario. La circunstancia se repite en todos los casos analizados del Juzgado Militar de Prensa como evidencia de la falta de garantías jurídicas. Lo novedoso es que el propio secretario del juzgado califica al periodista como «culpado» (folio 4, línea 8 del sumario). El proceso todavía no se había instruido, ni siquiera comenzado, pero ya constaba por escrito la culpabilidad. El error del alférez adscrito al Cuerpo Jurídico es relevante porque prueba algo obvio hasta para la propia víctima: la suerte de Javier Bueno estaba echada y todo lo que se hiciera en el Juzgado Militar de Prensa respondería a la necesidad de dar una apariencia jurídica a su fusilamiento.

El secretario del juzgado extracta la referida ficha e indica que el «adalid de la resistencia a ultranza», a pesar de haberse alineado con el coronel Casado, era un «periodista de máximo prestigio dentro del ámbito del socialismo

revolucionario español», Asimismo le atribuye, con razón, un papel fundamental en la revolución asturiana de 1934, por el que Javier Bueno fue procesado y condenado en un anterior consejo de guerra celebrado el 21 de septiembre de 1935 del que no se aporta documentación alguna. Ni siquiera su referencia, que habría incluido una condena a treinta años de cárcel y una multa de setenta millones de pesetas, aquella por la que el periodista preguntó si debía abonarla a plazos o al contado. Javier Bueno -según los testimonios de sus amigos- nunca perdió el humor de quien compaginó la firme defensa de su ideología socialista con la amabilidad en las formas.

El testimonio del secretario a partir de la ficha elaborada gracias a los datos «suministrados por personas y entidades de absoluta solvencia», siempre anónimas, también señala que Javier Bueno combatió con la pluma y las armas en el frente asturiano hasta que resultó herido de bala en un tobillo. La valoración redundante en el carácter carismático del encausado: «con todo lo cual acrecentó aún más su prestigio entre las masas rojas». La consecuencia del balazo fue una cojera que le obligó a llevar bastón, pero no le impidió seguir al frente del periódico *Avance*, por entonces editado en Gijón. La localización de la herida y la necesidad de desplazarse con bastón no constan en el documento para evitar cualquier atisbo de conmiseración.

Tras la caída del frente asturiano en octubre de 1937, el periodista pasó a Francia por vía marítima, regresó a España por la frontera catalana y pronto llegó a Madrid para dirigir el diario socialista *Claridad*. Estos datos figuran incompletos en la ficha del juzgado, pero el secretario da fe y testimonio de que Javier Bueno fue presidente de la Asociación de la Prensa y de la Agrupación Profesional de Periodistas, que «colaboraron abiertamente con los titulados Gobiernos rojos». La segunda de las agrupaciones indicadas estaba integrada en la UGT, aunque el dato no figura en la información del sumario. La conclusión del determinante testimonio del alférez del Cuerpo Jurídico, a partir de la ficha depositada en el juzgado, es rotunda: Javier Bueno, «el culpado», «es desde luego una de las figuras más destacadas del marxismo español a quien se citaba frecuentemente como modelo de lo que debe ser el verdadero antifascista».

A la vista de la conclusión, no debe sorprender que quien ni siquiera estaba procesado ya apareciera en el documento como «culpado» por motivos

ideológicos. La necesidad de despachar el tema del periodista aceleró los plazos. Dos días después, el juez Manuel Martínez Gargallo decreta «el procesamiento de Javier Bueno y Bueno en atención a los cargos que le resultan» en el testimonio dado por el secretario el día 17, decide trasladarse junto al mismo a la cárcel de Porlier al objeto de recibir declaración indagatoria y pide, por último, una serie de informes a distintas autoridades políticas, militares y policiales de Asturias. Mientras tanto, y al igual que en otras ocasiones, el secretario recaba testimonios periodísticos publicados en Madrid que se adjuntan al sumario como pruebas para la acusación. Tras haber consultado unos quince sumarios instruidos en el Juzgado Militar de Prensa, no me consta que ese secretario encontrara una sola prueba de descargo en la hemeroteca. Si las hubiere, su localización y puesta a disposición del juzgado correspondía al acusado en colaboración con amigos o familiares.

Las instrucciones de las autoridades militares serían terminantes sin necesidad de figurar por escrito: el proceso contra Javier Bueno debía ser fulminante, ejemplar y propio de los plazos de un verdadero sumarísimo de urgencia, una circunstancia poco frecuente a la vista de otros procesos coetáneos que se prolongaron durante meses e incluso años. El mismo día 19 de julio, el juez y el secretario se personan en la cárcel de Porlier e interrogan a un periodista consciente de la inutilidad de negar su relevancia como militante antifascista.

Javier Bueno declara que el inicio de la guerra le sorprendió en Oviedo, adonde se había dirigido para reanudar su actividad periodística tras haber sido amnistiado por el gobierno del Frente Popular en febrero de 1936. La salida a hombros junto con su hija Mercedes por las calles de Oviedo le reafirmaría en su militancia antifascista. La escena se repitió el 26 de febrero a su llegada a Madrid, siendo llevado a hombros por la Gran Vía hasta la plaza de Callao. Este reconocimiento popular no figura en la declaración, pero el interrogado reconoce su voluntad de luchar contra el fascismo: «Al iniciarse el cerco [de dicha capital asturiana, el encausado] tomó voluntariamente un fusil y como simple miliciano y sin alcanzar nunca otra graduación permaneció en él hasta los últimos días de noviembre o primeros de diciembre en que resultó herido y fue evacuado a Gijón». A partir de estas fechas, Javier Bueno reanuda la labor como director de *Avance*, que se editó en los vetustos talleres de *El Comercio*: «en dicho diario

realizó como es lógico una labor de apoyo y aun aliento a la resistencia armada contra las Fuerzas del General Franco, si bien siempre intentó hacer compatible esa orientación con la de condenar terminantemente los excesos que pudieran ser conseguidos, digo cometidos, por elementos afines».

El periodista con este último matiz se agarra a una remota posibilidad de que la condena no implicara el fusilamiento y declara asimismo que, tras pasar por Francia y Cataluña entre octubre y noviembre de 1937, se dirigió a Madrid donde recibiría el encargo de dirigir el diario *Claridad*, portavoz de la UGT y vinculado a las posiciones de Largo Caballero. El «cargo [lo] he venido desempeñando [desde el 17 de noviembre de 1937] sin interrupción hasta la terminación de la guerra orientando sus campañas en un sentido análogo a lo ya especificado al referir[me] a *Avance*».

Finalmente, Javier Bueno niega ante el juez haber desempeñado cargos políticos o sindicales, pues los referidos al frente de los periodistas de Madrid «eran de carácter meramente profesional». Las fuentes anónimas y de «probada solvencia» consultadas por el secretario afirman lo contrario y, a diferencia de lo dicho por el encausado, estas denuncias no necesitaban de pruebas. El diligente alférez, no obstante, localiza un par de recortes de la prensa madrileña, concretamente de *Claridad* y *Blanco y Negro*, para probar la militancia antifascista de Javier Bueno y el 31 de julio los adjunta al sumario, junto con más de cuarenta ejemplares del citado periódico.

Las diligencias judiciales de Manuel Martínez Gargallo pronto tuvieron respuesta, tanto que la misma llegó antes de ser requerida. La incongruencia merece una reflexión sobre el rigor de las actuaciones en este juzgado. El 29 de junio, dieciocho días antes de que el juez firmara dichas diligencias para recabar testimonios y pruebas, el comisario jefe de Oviedo le remite un informe acerca de Javier Bueno. La falta de correspondencia en las fechas entre la diligencia y el resultado de la misma indica que, de hecho, esos informes ya se habían solicitado cuando su requerimiento constó como diligencia del juez. Las prisas por llegar a una condena que se consideraría obvia tienen estas incongruencias documentales.

El comisario de Oviedo escribe palabras duras contra el periodista y, aunque no indica delitos de sangre o tipificados en el ordenamiento jurídico del momento, concluye que «en toda su actuación periodística ha demostrado ser uno de los mayores enemigos de España y de los más incondicionales al servicio de Moscú». Las pruebas o la simple concreción brillan por su ausencia, aunque señala que todos los editoriales «eran del más refinado estilo marxista». El contexto permite entender refinado como sinónimo de perverso. En cualquier caso, el tópico propagandístico sobre los lacayos de la URSS era omnipresente y también valía a la hora de redactar un testimonio, aunque su consecuencia última pudiera sustanciarse en un fusilamiento por ser el encausado «absolutamente incompatible con el Nuevo Estado Español». Por cierto, el periodista madrileño evidenció en sus escritos una orientación contraria al estalinismo y a cualquier formulación burocrática o autoritaria del marxismo, pero estos matices son propios de los historiadores. Los instructores de los sumarios iban por caminos más directos a la condena.

El informe del delegado comarcal de FET y de las JONS en Gijón también se adelantó a la correspondiente diligencia de Manuel Martínez Gargallo, pues está fechado el 14 de julio de 1939 y es la contestación a un telegrama cursado el 4 del mismo mes, es decir, once días antes de que el auditor mandara iniciar el proceso. El juez debió ser un hombre previsor. El responsable falangista comete un grave error al afirmar que el periodista era «diputado del Partido Socialista». Esta falta de información cuestiona la veracidad de la acusación sobre su participación el 19 de julio de 1939 en la frustrada toma de un cuartel de la Guardia de Asalto «junto con un tal Taibo». La precisión no era la norma en este tipo de denuncias.

El falangista no manifiesta duda alguna sobre sus fuentes y, además de acusarle de ser el verdadero responsable del Consejo Soberano de Asturias, considera a Javier Bueno como «uno de los principales cabecillas marxistas» porque, entre otros motivos, como director de *Avance* en dicha localidad asturiana «con hábil pluma volvió a sembrar el veneno de su política». De hecho, todos sus artículos -no cita ninguno como prueba- «eran para combatir fieramente a nuestra Sagrada Causa por medio del engaño, la mentira y la falsedad y el vocabulario empleado es el más soez y blasfemo que en letras de molde se empleó desde

que existe el lenguaje castellano». Los engaños, las mentiras y las falsedades carecen de ejemplos, que tampoco constan en lo referente a las blasfemias. La imposibilidad de identificar la firma me impide dar el nombre de quien debiera figurar en los anales como historiador de nuestro lenguaje, al menos en su vertiente soez y blasfema. La conclusión del falangista defensor de «nuestra Sagrada Causa» es definitiva y anuncia el inminente fusilamiento del periodista: «Individuo verdaderamente indeseable para la España Imperial». La coexistencia de denominaciones como Nuevo Estado Español, derivado del triunfo de la Sagrada Causa, y la España Imperial prueba que la labor de Ramón Serrano Suñer como arquitecto del Estado era compatible con las aportaciones de los entusiastas funcionarios.

El 20 de julio de 1939, el responsable en Madrid de la Jefatura del Servicio Nacional de Seguridad, Eduardo Roldán, remite un informe al juez «en contestación a su atenta comunicación de fecha del 25 del pasado»; es decir, Manuel Martínez Gargallo empezó a recabar pruebas veinte días antes de que el auditor mandara iniciar el proceso. Eduardo Roldán considera que el periodista «es gran agitador de las masas obreras» y «revolucionario de malos antecedentes». Nunca los hubo en estos procesos con buenos antecedentes, pero lo único concreto que incluye es un disparatado rumor: «se supone que últimamente [Javier Bueno] había de ser nombrado por los rojos Comisario General de Aviación». Preguntado al respecto por el juez, el atónito periodista negó tan singular circunstancia en la trayectoria de quien rechazó otros cargos más acordes con sus tareas. De hecho, Javier Bueno nunca formó parte del comisariado y no me consta la existencia de ese cargo, al menos que se trate en realidad del director general de Aviación Civil.

El 31 de julio de 1939, el secretario del Juzgado Militar de Prensa une al sumario un par de recortes periodísticos sobre Javier Bueno y solicita informes en el mismo sentido al «Sr. jefe provincial de Prensa de Asturias». La imprecisión del cargo provocaría que la solicitud se perdiera y, tan resignado como presuroso, el 9 de agosto de 1939 el juez prescinde de los informes de prensa procedentes de Oviedo «al objeto de no demorar por más tiempo la conclusión de esta causa». De hecho, tres días antes Manuel Martínez Gargallo había vuelto a interrogar a Javier Bueno en Porlier y, aunque el periodista negara la veracidad

de algunas de las acusaciones realizadas a partir de lo publicado en prensa, las mismas se sustanciaron en una acusación global sin necesidad de entrar en detalles o recabar algún tipo de pruebas.

En concreto, Javier Bueno negó haber presidido, en las primeras semanas de la guerra y en el cerco de Oviedo, un comité «integrado por Lorenzo Mulero, Silverio, Andrés, Víctor, Villa, Ibáñez, el capitán Calleja y el sargento Gasaval», según la relación de nombres inserta en una anónima nota de prensa recortada por el secretario de un ejemplar de *Claridad*. El recorte carece de identificación hemerográfica, aunque el texto hace referencia a que en el mismo día también había sido publicada por *Ahora*. Asimismo, Javier Bueno rechazó la acusación de haberse presentado en el cuartel de la Guardia de Asalto de Oviedo el 19 de julio de 1936, provisto de un fusil y «en compañía de un tal Taibo y otros con intención de adueñarse del mismo».

Javier Bueno aceptó, sin embargo, la responsabilidad que como director de los periódicos *Avance* y *Claridad* le correspondía por los editoriales y los artículos sin firma publicados durante el tiempo que los dirigió. El preso añadió en su declaración que, además de una conferencia radiofónica pronunciada con ocasión del cuarto aniversario del octubre asturiano, intervino otra vez por radio al día siguiente de constituirse el Consejo Nacional de Defensa. El propósito era hacer pública su adhesión al mismo. La alocución a través de los micrófonos de Unión Radio tuvo lugar el 6 de marzo de 1939. Javier Bueno tal vez pensara que su apoyo al coronel Casado en su frustrado intento de firmar «una paz digna y honrosa» con el general Franco le pudiera suponer una remota posibilidad de salvación.

Mientras tanto, la declaración de Javier Bueno había dado pistas para añadir un hecho probado a su acusación, pronto se localizó en la hemeroteca la prueba correspondiente y el día 10 de agosto el secretario del juzgado realiza la transcripción de una alocución radiofónica del periodista que fue publicada en *Claridad* el 7 de octubre de 1938. Se trata de un discurso pronunciado por Javier Bueno ante los micrófonos de Unión Radio «con ocasión del aniversario de la llamada Revolución de Octubre de 1934». El texto vincula el movimiento asturiano con la actualidad de la guerra. Así, con esta prueba de una acusación por motivos ideológicos que nunca abarcó hechos delictivos o de sangre, se

completan las tareas tendentes a la redacción del auto resumen que el juez firmaría el día siguiente. Ambos oficiales del Cuerpo Jurídico debieron tener dedicación exclusiva o preferente a este caso para darle una salida rápida.

La ausencia de cualquier posibilidad de defensa por parte del encausado aceleró el proceso, máxime cuando -a diferencia de lo ocurrido en otros casos- ni siquiera se le concedió la posibilidad de recabar unos improbables avales con la ayuda de familiares o amigos. Así, dos días después de desistir en la espera de los informes periodísticos procedentes de Asturias, el juez dicta un auto resumen que ratifica el procesamiento de Javier Bueno «por estimar plenamente acreditado que dicho procesado, persona de inequívoca significación contraria al Movimiento Nacional y una de las figuras más representativas del marxismo español, tomó las armas voluntariamente desde el primer instante al objeto de luchar contra el referido Alzamiento y que en fecha posterior pasó a ocupar la dirección de los diarios *Avance* y *Claridad* en los cuales realizó una campaña tan violenta contra los ideales que encarnaban el espíritu de la España Nacional, sus figuras más relevantes y su Ejército que es difícilmente superable».

Manuel Martínez Gargallo debió tener alguna remota duda acerca de que este auto resumen no hiciera inevitable la pena de muerte y añade algo más al texto firmado el 11 de agosto e inmediatamente trasladado al plenario del consejo de guerra: «Dicho procesado ocupó los cargos de Presidente de la Agrupación Profesional de Periodistas y de la Asociación de la Prensa, desde los cuales coadyuvó en la medida de sus fuerzas a la prolongación de la resistencia roja, a la que contribuyó asimismo en altísimo grado con su labor periodística que puede ser conceptuada por su fondo, su forma y la personalidad de quien la llevaba a efecto, como la más eficaz de las realizadas a partir de julio de 1936». Al día siguiente, el secretario del juzgado entregó el sumario de veinte folios útiles «en el decanato de las Secretarías», junto con más de cuarenta ejemplares de *Claridad* «unidos en cuerda floja». Los periódicos han desaparecido, como suele ocurrir en estos procesos con los documentos unidos al sumario de esa manera.

Vista la literalidad del auto resumen que, en lo fundamental, repite lo escrito en el testimonio inicial del secretario del juzgado, el periodista Javier Bueno era hombre muerto. Pronto se cumplió la obviedad para los conocedores de estos consejos de guerra sumarísimos de urgencia. La fiscalía del Ejército de

Ocupación el 14 de agosto de 1939 solicita la pena de muerte basándose en un extracto de lo instruido y la vista pública del consejo de guerra tuvo lugar el día 22 del mismo mes. La defensa se limitó a realizar una petición rutinaria y carente de argumentación. Tampoco cabía otra opción en aquellas circunstancias, pues el defensor militar, además de carecer de la formación jurídica de los instructores, ni siquiera había tenido acceso a la documentación de la instrucción hasta ese preciso momento. De acuerdo con lo reflejado en el acta, el oficial «considera excesiva la sanción solicitada por el Ministerio Fiscal y pide para su defendido la pena de treinta años de reclusión».

Nadie rebatió al rutinario e inútil defensor, pero tampoco nadie aportó nuevas pruebas o simplemente contrastó la veracidad de la información incluida en los recortes o los informes aportados por el Juzgado Militar de Prensa. Todo lo instruido se dio por válido y probado porque, además de ser la tónica general, era preciso condenar a muerte a un periodista que por entonces esperaba resignado la sentencia, mientras daba clases de gramática e historia al resto de los reclusos y departía en latín con el capellán de la prisión, el «maravillado» padre Félix, en la tercera galería, la de los condenados a muerte. El testimonio lo debemos a su colega Juan Antonio Cabeza, que salvó el pellejo y pudo contarlo.

La responsabilidad de Javier Bueno se resumía en un párrafo de la escueta sentencia: el periodista era «de exaltada significación revolucionaria y una de las figuras más destacadas en la lucha contra los principios esenciales de la Patria». Dada la trascendencia casi metafísica de la acusación, nadie molestó al presidente del consejo de guerra permanente n.º 2, el oficial José Iglesias, con dudas acerca de las pruebas y su efectivo encaje en los tipos penales del Código de Justicia Militar. Tampoco se debatió en la sesión plenaria sobre unos patrióticos «principios esenciales» de improbable concreción jurídica. La acusación contra Javier Bueno casi es un tópico de la época, pues al igual que tantos otros miles de republicanos fue condenado «como autor de un delito de adhesión a la rebelión del párrafo segundo del artículo 238 del Código de Justicia Militar con la concurrencia de circunstancias agravantes de perversidad y de trascendencia». La sentencia lleva la firma del citado presidente, junto con la de

los vocales Agustín Martín, Jesús Lozano y Manuel Pérez Povedano. El oficial César López Pericomi actuó como ponente.

Algunos de los trabajos consultados indican que el procesado tuvo la oportunidad de defenderse durante diez minutos y que Javier Bueno aprovechó la ocasión para reafirmarse en lo escrito como periodista republicano. La circunstancia queda reflejada en el acta: «oído el procesado manifestó lo siguiente: ‘Que su ideal ha sido y es la República y que para ella luchó dignamente, pero que nunca permitió que desde su periódico se incitara al crimen». Javier Bueno confiaría, como último recurso, en no haber cometido crímenes ni haber incitado a los mismos con su labor periodística, pero bastaba su fidelidad a la II República legalmente constituida para condenarle a muerte por adhesión a la rebelión, con las circunstancias agravantes de «perversidad y trascendencia». En cualquier caso, resulta improbable que el condenado consumiera diez o quince minutos, pues estas sesiones plenarias de los consejos de guerra solían dedicar ese tiempo, como máximo, a cada uno de los procesados. Otras veces se procedía de forma colectiva para acelerar el trámite, donde nadie tuvo ocasión de dar un último discurso de reafirmación para la historia venidera. Si acaso, de soltar un grito de desesperación o pedir, con la misma desesperación, algo de clemencia.

Una vez dictada la sentencia y confirmada por el auditor el 28 de agosto, solo faltaba «el enterado» del general Franco para fusilar al periodista. El mismo llegó el 22 de septiembre de 1939, sin la firma ni el nombre de quien lo había decidido. La discreción se impone en estos casos para salvaguardar el paso a la leyenda o la historia. El fusilamiento de Javier Bueno tuvo lugar el 27 del mismo mes a las seis de la mañana, según el certificado médico firmado por el teniente Rafael Puga Ramón, que probablemente habría olvidado estos desagradables menesteres cuando accedió a la presidencia de la Diputación Provincial de La Coruña (1961-1970). El dato se puede consultar en la Wikipedia. Ahora el político del franquismo cuenta con un centro educativo dedicado a su memoria, mientras que el Premio Javier Bueno desapareció para no herir susceptibilidades o provocar divisiones. En el documento -folio 27 del sumario- no se indica el lugar que precedió al entierro en una fosa común. Gracias a Mirta Núñez Díaz-Balart, sabemos que fue en las tapias del cementerio del Este, actualmente La Almudena. Tampoco aparece en la documentación referencia alguna que

permitiera identificar al pelotón o a quien lo mandó. Estos militares harían una labor rutinaria a la luz de las cifras relacionadas con la represión en el Madrid de la inmediata posguerra.

El archivo definitivo del sumario tuvo lugar el 24 de abril de 1944, aunque hay diversas actuaciones administrativas que se extienden a lo largo de dicho año. Mientras tanto, la familia dejada por Javier Bueno, dos mujeres y ocho hijos, vivió un particular calvario que parece extraído de una novela de Dickens. La casa familiar de Madrid resultó incautada trasladándose sus habitantes a un garaje, Mariana Brasero Potenciano fue encarcelada en Oviedo durante la guerra y trasladada a la cárcel de Lugo hasta el 15 de febrero de 1940. Su «delito» era haber contraído matrimonio civil con el director de *Avance*. El hijo común, el octavo de Javier Bueno y nacido en 1934, vagó de la mano de una hermana de su madre por los campos de concentración de Francia antes de volver a su país como traductor y compositor. Los aficionados del Atlético de Madrid le recuerdan a menudo, así como quienes evocan a los famosos solistas de los sesenta y setenta que interpretaron canciones de Augusto Algueró.

La España de la Victoria también era la de una venganza hasta extremos éticamente insoportables, pero las valoraciones críticas y otras informaciones ya vendrán con la redacción del futuro ensayo dedicado al Juzgado Militar de Prensa. La presente nota solo tiene el valor de lo provisional sujeto a rectificaciones gracias a la colaboración de otros historiadores. Baste ahora con extractar los datos fundamentales de un proceso porque la historia, sin documentos o pruebas, es un relato de ficción. Si alguien tiene dudas al respecto de lo aquí afirmado, puede consultar el sumario 33.582 que es de acceso público y, por supuesto, pongo toda la documentación complementaria de la que dispongo a su disposición.

En Alicante, a 21 de julio de 2021